

Defensa judicial

28 de febrero de 2022 al 04 de marzo 2022

Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico



Continúa virtualidad en la Rama Judicial, presencialidad será de mínimo 60 %

El Consejo Superior de la Judicatura decidió que los servicios de justicia se continuarán prestando de manera virtual a través de los medios tecnológicos dispuestos. Además, a partir de mañana (1° de marzo) todos los despachos, sedes judiciales y dependencias administrativas retornarán a la presencialidad en un mínimo del 60 %, mientras dure la emergencia sanitaria.

Recordemos que hasta el 30 de abril se prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Las sesiones de los órganos colegiados de la Rama Judicial se podrán realizar de manera virtual, presencial o mixta.

Por su lado, las audiencias se harán preferentemente en forma remota, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para su agendamiento, realización, grabación, almacenamiento y disponibilidad, de conformidad con las normas procesales vigentes.

Igualmente, se ordena a los funcionarios de la justicia colaborar a los usuarios que encuentren barreras de acceso o no cuenten con los medios tecnológicos para acceder virtualmente al servicio que prestan.

Magistrados, jueces y jefes de dependencias podrán implementar las condiciones de trabajo en casa cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan al servidor judicial realizar sus funciones en su lugar de trabajo, respetando el horario, la jornada laboral, el derecho al descanso y la desconexión laboral.

Lo anterior bajo criterios medibles de periodicidad, plazos de entrega, medio electrónico al cual deberán remitir la información, así como otros relevantes para asegurar el cumplimiento de funciones, su control y seguimiento.

Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo, PCSJA 22-11930, 28/02/2022.

www.cali.gov.co/juridica

Apartarse de la jurisprudencia no constituye causal de anulación de laudos arbitrales

El numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012 prevé como causal de anulación del laudo haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado. El fallo en conciencia no lleva a cabo un razonamiento soportado en el ordenamiento jurídico vigente, sino que se imparte solución al litigio de acuerdo con la convicción personal y el sentido común. Se agrega que el juez debe apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y podrá tener en cuenta en esa libre apreciación de la prueba las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia.

Por lo anterior, y aterrizando en el caso concreto, la Sala encuentra que los recurrentes no proponen que se está ante un fallo en conciencia, sino un desacuerdo con la forma en que el tribunal interpretó la norma y la conclusión conforme a la cual el término de caducidad no se puede contabilizar desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación en los supuestos en que esta se produce vencidos dos años, contados desde la fecha en que debió hacerse unilateralmente por la entidad. Es decir, consideran que existe una aplicación incorrecta de la norma.

Sin embargo, precisó el alto tribunal que el hecho que los árbitros no sigan los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado no fue definido por el legislador como causal de anulación de laudos arbitrales (artículo 41 de la Ley 1563/12). Además, pueden apartarse de esos criterios judiciales (art. 4, Ley 169 de 1896 y 7 del CGP), pues los árbitros en sus decisiones solo están sujetos a ley y la jurisprudencia es solo un criterio auxiliar de la actividad judicial (arts. 116 y 230 C. N.), concluyó la Sala (M. P. Guillermo Sánchez Luque).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia, 11001032600020200013200 (66315), 23/09/2021.

Sustentación del recurso de apelación contra sentencias bajo el Código General del Proceso

La Corte Constitucional estudió el trámite del recurso de apelación de sentencias en los procesos tramitados bajo el Código General del Proceso (CGP) y para ello empieza precisando que los artículos 322 y 327 del CGP regulan el



Defensa judicial



trámite del recurso de apelación contra sentencias, el cual, conforme al diseño del legislador, se desarrolla en diversas etapas.

En aplicación al caso concreto, en el que se declararon desiertos los recursos ya que las partes no acudieron a la audiencia de sustentación, se deben destacar tres aspectos que surgen con claridad:

Debe distinguirse entre la etapa de precisión de los reparos contra la sentencia, que se surte ante el juez de primera instancia, y la de sustentación del recurso, que se efectúa ante el superior al que le corresponde resolver la apelación. El CGP autoriza la presentación por escrito de la precisión de los reparos, mas no de la sustentación del recurso.

La forma prevista por el legislador para la sustentación del recurso de apelación contra sentencias es verbal, y la oportunidad para hacerlo es en la audiencia de sustentación y fallo que preside el superior al que le corresponde desatar el recurso.

No existe una autorización expresa en el CGP para sustentar el recurso de apelación por escrito. Por lo tanto, este trámite se rige por la regla general según la cual “las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias” (art. 3º del CGP), y la prohibición de sustituir las intervenciones orales por escritos.

Así mismo, en reiterada jurisprudencia la Sala ha explicado que el recurso de apelación contra sentencias se debe sustentar verbalmente en la audiencia que para tal efecto convoca el superior jerárquico, conforme al artículo 327 del CGP. Frente a este tema la Sala de Casación Laboral ha considerado que, por el contrario, el recurso de apelación contra sentencias admite ser sustentado por escrito.

Con motivo de esta diferencia de criterios llevó a que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-418/19, reafirmara que “el recurso de apelación de sentencias debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del

recurso”, en línea con lo que reiteradamente venía determinando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Concluyó el alto tribunal que esta normativa exige que tales recursos se sustenten oralmente ante el superior al que corresponde desatar el recurso, dentro de la audiencia de que trata el artículo 327 del CGP (M. P. Alejandro Linares Cantillo).

Corte Constitucional, Sentencia, T-021, 27/01/2022.

Contrato realidad también se presenta cuando se celebra un vínculo laboral en condiciones de desventaja

El concepto de contrato realidad, en donde prima la realidad sobre las formalidades, cobra relevancia cuando existe una relación de tipo laboral, pero se encubre en una modalidad contractual de otra naturaleza, bien sea civil o comercial.

Así mismo, precisó el Ministerio del Trabajo, cuando se celebra un contrato laboral en condiciones de desventaja para el trabajador, como es el caso de la vinculación de un trabajador por medio de un contrato laboral de obra o labor, pero la naturaleza de la labor y las condiciones de su vinculación son propias de un contrato laboral a término indefinido.

La aplicación de este principio de contrato realidad se ha dado en sede de tutela en casos en donde se ha solicitado la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, no hay certeza de su alcance en situaciones donde el trabajador no está en debilidad manifiesta o en otra situación amparada por este derecho, como tampoco la procedencia de su aplicación dentro de un proceso laboral ordinario.

Así las cosas, corresponde al interesado interponer las acciones ante el juez ordinario si considera que, existiendo estabilidad laboral en los contratos de trabajo por obra o labor, el mismo haya sido terminado, autoridad que tiene competencia exclusiva y excluyente para declarar derechos individuales y dirimir controversias laborales.

Defensa judicial



En cuanto a la revisión de la liquidación laboral, podrá comunicarse con la dirección territorial correspondiente para las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social.

Mintrabajo, Concepto, 8223, 21/02/2022.

Decisiones judiciales deben respetarse: Corte Constitucional

Las recientes decisiones de la Corte Constitucional que han garantizado diferentes derechos han levantado tanto voces solidarias y de apoyo como fuertes críticas, entre ellas del Gobierno Nacional.

Por esa razón, el alto tribunal constitucional, a través de un comunicado, expresó que “la Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad”.

En la nota enviada a la prensa también se resalta que los fallos que la Corte dicta en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento, tanto para las autoridades como para particulares. Por ello exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas, si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello, y garantizar su ejecución o cumplimiento.

Continúan los magistrados defendiendo su autonomía e independencia en la toma de importantes decisiones, frente al inconformismo del Ejecutivo sobre algunos fallos, poniendo en tela de juicio el criterio de los jueces del órgano de cierre, como lo hizo con lo determinado frente al aborto.

El apoyo por parte de las demás corporaciones no se ha hecho esperar, como el Consejo Superior de la Judicatura, que exalta la labor de los funcionarios que toman estas decisiones y resalta que los

servidores judiciales actúan dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley, ya que su misión es el fortalecimiento del Estado social de derecho.

Corte Constitucional, Comunicado, 03/03/2022.

Condición de padre o madre cabeza de familia, como sujetos de especial protección, debe declararse ante notario

Condición de padre o madre cabeza de familia, como sujetos de especial protección, debe declararse ante notario. El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta relacionada con la forma de establecer la condición de padre o madre cabeza de familia, como sujetos de especial protección en varios ámbitos, entre ellos el laboral.

La entidad recordó que dicha calidad de padre o madre cabeza de familia se otorga para aquel que asume en forma exclusiva y sin apoyo alguno la responsabilidad del hogar, aunado a ello la ausencia en asumir la responsabilidad del otro padre debe obedecer a factores de fuerza mayor que no son predicables a su mera ausencia, como tampoco a un reducido aporte o cumplimiento de sus deberes.

Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el párrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, la condición de mujer cabeza de familia, así como su cesación, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas desde el momento en que ocurra el respectivo evento, expresando las circunstancias básicas del caso.

Por lo tanto, la entidad pública no debe adelantar ningún tipo de actuación o procedimiento para que se reconozca la condición de padre o madre cabeza de familia, pues la misma debe ser declarada ante un notario por la mujer o el hombre que requiera que le sea reconocida.

Ahora bien, pese a la potestad de desvincular a los empleados públicos nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los derechos

Defensa judicial



fundamentales de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad deben observarse varios requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos:

- (i) La adopción de medidas afirmativas tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad.
- (ii) La motivación del acto administrativo de desvinculación.

Departamento Administrativo de la Función Pública,
Concepto, 34961, 24/01/2022.

Fuente: Legismovil – Boletín Oficial
Artículo 20

Elaboró: Carlos Alberto Aponte García- Contratista

Revisó: Dra. Martha Lucia Triana López - Asesor

Aprobó: Dr. Hugo Alejandro Jiménez Balcázar – Subdirector de
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico